Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, de tres de abril de dos mil veinticuatro.

Visto el expediente relativo al recurso de revisión **06369/INFOEM/IP/RR/2023**, interpuesto por **XXXXXXXX X**, a quien en lo sucesivo se le denominará **la parte Recurrente**, en contra de la respuesta a su solicitud de información identificada con número de folio **00056/ATLAUTLA/IP/2023,** proporcionada por el **Ayuntamiento de Atlautla**, en lo sucesivo el **Sujeto Obligado**; se procede a dictar la presente resolución, con base en los siguientes:

**I. A N T E C E D E N T E S**

1. **Solicitud de acceso a la información.** Con fecha **catorce de agosto de dos mil veintitrés**, la parte **Recurrente** a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo subsecuente el SAIMEX, formuló ante el **Sujeto Obligado**, la solicitud de acceso a la información pública a la que se le asignó el número **00056/ATLAUTLA/IP/2023**, mediante la cual requirió la información siguiente:

*“solicito el expediente sobre la gasolinera que se esta construyendo en el popopark, los acuerdos que ha tenido el presidente con los pobladores para no seguir bloqueando la carretera, la opinion del director juridico y de gobierno sobre la gasolinera si cumple con los requisitos que ordena la ley tanto federales, estatales y municipales y de quien es competencia el otorgar esos permisos, tambien que explique en que horarios trabaja en el ayuntamiento de amecameca y en que horarios en atlautla su forma de pago, sueldo, cfdi de abril a julio y si no viola alguna ley como servidor publico.” (Sic)*

**Modalidad elegida para la entrega de la información:** A través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

1. **Prórroga.** El **cuatro de septiembre de dos mil veintitrés,** el **Sujeto Obligado** informó que el plazo de quince días hábiles para atender la solicitud de mérito fue prorrogado por siete días más en virtud de las siguientes razones:

*“Con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se le hace de su conocimiento que el plazo de 15 días hábiles para atender su solicitud de información ha sido prorrogado por 7 días en virtud de las siguientes razones:*

*Es aprobada su prorroga para que entregue en los días autorizados” (Sic)*

De esta manera, como refiere el **Sujeto Obligado** la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, contempla la potestad de ampliar el plazo hasta por siete días, en términos del párrafo segundo del artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas para hacerlo, y que estas sean aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución; en el caso particular que nos ocupa y derivado de las constancias que obran en el expediente, se advierte que **NO se observaron las formalidades que establece la Ley de la materia**, pues no se anexó el Acuerdo del Comité de Transparencia de dicho ente público, mediante el cual se aprobara la ampliación del plazo para dar atención a la solicitud de información.

1. **Respuesta.** En fecha **trece de septiembre de dos mil veintitrés**, el **Sujeto Obligado** remitió respuesta a la solicitud de información, al tenor de lo siguiente:

*“En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*Estimado (a) solicitante reciba con el presente un cordial saludo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50, 51, 53 59 y 160 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; me permito adjuntar el archivo que subio a la plataforma SAIMEX el Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Atlautla. Sin más por el momento me despido de usted.” (Sic)*

Adjunto a la respuesta, el **Sujeto Obligado** entregó un archivo electrónico denominado “***ExpedientedeGasolineriaPopopark-Atlautla-2023.pdf***” que contiene la siguiente información:

* Oficio número ATLA/DMDU/059/2023 del veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, a través del cual el Director Municipal de Desarrollo Urbano, informa que, en lo relativo a la solicitud del expediente de una Gasolinera que se está construyendo en Popo Park, localidad del Municipio de Atlautla, el predio se localiza de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Atlautla vigente, publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 11 de octubre de 2021, en una zona marcada como CRU-200-A y CRU-T, que son Corredores Urbanos densidad 200 y corredor urbano Turístico, que en su uso b-19 marcado en las tablas de usos del suelo en la especificación de uso General del suelo se tiene el uso de Gasolinera y su uso específico de Estaciones de Servicios, Almacenamiento y Expendio de Disel y Gasolina, cuyo uso es permitido de acuerdo al plan vigente.

Asimismo, con relación a las licencias de construcción y de excavación que fueron otorgadas por dicha Dirección informa que se rigieron en estricto cumplimiento a lo que marca el artículo 18.1, 18.3 fracción I, II y IV, 18.6 fracción II y 18.21, fracción I, II, III inciso D y E del Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México.

* Licencia de Construcción de Barda Perimetral, expedida dentro del expediente 019, en fecha 22 de junio del 2023, por el Director de Desarrollo Urbano, a favor de la persona moral con razón social “Combustibles CAMYCEN S.A. de C.V.” para el domicilio: XXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXXX X, XXXXX XXXX XXXX del Municipio de Atlautla, Estado de México, en la que se dejó a la vista la clave catastral del predio donde se realizaría la obra.
* Licencia de Excavación, expedida dentro del expediente 001, en fecha 05 de julio del 2023, por el Director de Desarrollo Urbano, a favor de la persona moral con razón social “Combustibles CAMYCEN S.A. de C.V.”, para el domicilio: XXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXXX X, XXXXX XXXX XXXX del Municipio de Atlautla, Estado de México, en la que se dejó a la vista la clave catastral del predio.
* Constancia de Alineamiento, Folio 019, de fecha de 19 de noviembre de 2022, expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano para el predio ubicado en: XXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXXX X, XXXXX XXXX XXXX del Municipio de Atlautla, Estado de México, en la que se dejó a la vista una clave catastral.
* Constancia de Numero Oficial de fecha 22 de noviembre de 2022, expedida por el Director de Desarrollo Urbano, para el predio ubicado en: XXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXXX X, XXXXX XXXX XXXX del Municipio de Atlautla, Estado de México, en la que se dejó a la vista la clave catastral del predio.

1. **Recurso de revisión.** Derivado de la respuesta del **Sujeto Obligado,** la persona solicitante interpuso Recurso de Revisión a través del **SAIMEX** en fecha **veinte de septiembre de dos mil veintitrés**, a través del cual expresó lo siguiente:

**Acto impugnado.** “*informacion incompleta solicite la opinion del director juridico y de gobierno sobre la gasolinera si cumple con los requisitos que ordena la ley tanto federales, estatales y municipales y de quien es competencia el otorgar esos permisos, tambien que explique en que horarios trabaja en el ayuntamiento de amecameca y en que horarios en atlautla su forma de pago, sueldo, cfdi de abril a julio y si no viola alguna ley como servidor publico*.” *(Sic)*

**Razones o motivos de la inconformidad:** *“no me me entrego la información completa falto solicite la opinion del director juridico y de gobierno sobre la gasolinera si cumple con los requisitos que ordena la ley tanto federales, estatales y municipales y de quien es competencia el otorgar esos permisos, tambien que explique en que horarios trabaja en el ayuntamiento de amecameca y en que horarios en atlautla su forma de pago, sueldo, cfdi de abril a julio y si no viola alguna ley como servidor publico.” (Sic)*

1. **Turno.** De conformidad con el artículo 185, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el recurso de revisión número **06369/INFOEM/IP/RR/2023**, se turnó por el sistema electrónico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, a la **Comisionada Guadalupe Ramírez Peña** para su análisis, estudio, elaboración del proyecto y presentación ante el Pleno de este Instituto.
2. **Admisión del recurso de revisión**: En fecha **veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés**, la Comisionada Ponente admitió a trámite el recurso de revisión que ahora se resuelve, dando un plazo máximo de siete días hábiles para que las partes manifestaran lo que a su derecho resultara conveniente, ofrecieran pruebas, formularan alegatos y el **Sujeto Obligado** presentara su informe justificado.
3. **Informe Justificado.** De las constancias que obran en el expediente electrónico aperturado con motivo del presente medio de impugnación, se advierte que durante el periodo de manifestaciones el **Sujeto Obligado** en fechas treinta de octubre y primero de noviembre de dos mil veintitrés, rindió su informe justificado a través de los archivos electrónicos que contienen la información siguiente:

* ***R. R. 056. DIRECCIÓN DE GOBIERNO.pdf:*** Oficio del treinta de octubre de dos mil veintitrés, a través del cual el Director de Gobierno Municipal, para atender el requerimiento relativo a su opinión como titular de dicha dirección, sobre el acuerdo al que se llegó con los pobladores de la delegación de PoPo Park, para no seguir bloqueando la carretera federal México-Cuautla, con respecto al tema de la construcción de la gasolinera, con fundamento en el Capítulo IV BIS, artículo 61 BIS, fracciones VII y X del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno informa lo siguiente:

*“El día 31 de Julio de 2013 se presentó el presidente municipal constitucional Raúl Navarro Rivera en la delegación de Popo Park sobre la carretera Federal México - Cuautla para atender a los ciudadanos que se manifestaron por la construcción de la Gasolinera.*

*Se llegó al acuerdo de reunirse el dia 04 de Agosto en las instalaciones de presidencia Municipal en Atlautla donde el Presidente municipal Raúl Navarro Rivera y los vecinos de Popo Park realizaron una mesa de trabajo donde se escucharon sus demandas. Estando presentes los representantes legales de la empresa CAMYCEN S. A. de C.V. quienes construyen la gasolinera.*

*Así mismo también estuvieron presentes funcionarios de la dirección regional de gobierno estatal, secretaria de desarrollo urbano estatal, secretario del Ayuntamiento Luis Alberto Rivera Torres, director municipal de desarrollo urbano José Alfredo Jiménez Galindo, director de Ecología Miguel Ángel Villanueva Bautista, así como el director de Gobierno municipal Liborio Flores Mejía.*

*El presidente municipal Raúl Navarro Rivera acordó de manera verbal con los ciudadanos inconformes, que se colocarán sellos de suspensión en el área donde se pretende construir la gasolinera, hasta que se muestren todos los permisos correspondientes y mientras tanto autoridades y vecinos estarán al pendiente de todo el proceso para que sea legal y transparente.”*

* ***RR 06369 JURIDICO.pdf:*** Oficios del veintitrés de agosto, diecinueve y treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, a través de los cuales la Titular de la Unidad de Transparencia solicita al Director Jurídico Municipal en varias ocasiones que remita la información que le fue requerida en la solicitud de información.

Documentos los anteriores que se pusieron a la vista de la parte **Recurrente** para efecto de que manifestara lo que a su derecho resultara conveniente, o bien, rindiera alegatos; sin embargo, fue omisa en ejercer dicha prerrogativa.

1. **Ampliación de plazo:** El **trece de marzo de dos mil veinticuatro**, se notificó a las partes el Acuerdo de Ampliación de Plazo para resolver el medio de impugnación que nos ocupa, en términos de lo dispuesto por el artículo 181, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir la resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

**a) Complejidad del asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.

**b) Actividad Procesal del interesado**: Acciones u omisiones del interesado.

**c) Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

**d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso:** Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “**TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”**, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

**“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.”** consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

**“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”,** visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto resulta de carácter excepcional.

1. **Cierre de instrucción**. En fecha **veinte de marzo de dos mil veinticuatro**, la Comisionada Ponente determinó el cierre de instrucción en términos de la fracción VI del artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Debido a que fue debidamente sustanciado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la Resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo con los siguientes:

**II. C O N S I D E R A N D O:**

**Primero. Competencia.** El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte Recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185, fracción I, 186 y 188 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**Segundo. Oportunidad y Procedibilidad del Recurso de Revisión**. Previo al estudio del fondo del asunto, se procede a analizar los requisitos de oportunidad y procedibilidad que debe reunir el recurso de revisión interpuesto, previstos en los artículos 178 y 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles, previsto en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, toda vez que el **Sujeto Obligado** remitió la respuesta a la solicitud de información el **trece de septiembre** **de dos mil veintitrés,** mientras que el recurso de revisión interpuesto por la parte **Recurrente**, se tuvo por presentado el día **veinte de septiembre** **de dos mil veintitrés,** esto es al quinto día hábil siguiente a aquel en que tuvo conocimiento de la respuesta impugnada. En este sentido, se concluye que el presente recurso de revisión se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en las disposiciones legales referidas.

Así también, por cuanto hace a la procedibilidad del recurso de revisión, una vez realizado el análisis del formato de interposición del recurso, se concluye la acreditación plena de los elementos formales precisados por el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en atención a que fue presentado mediante el formato visible en el **SAIMEX.**

Por otro lado, es de suma importancia mencionar que, si bien la parte **Recurrente** proporcionó un seudónimo como se advierte en el detalle de seguimiento del SAIMEX; sin embargo, el no proporcionar un nombre no es motivo para archivar la solicitud de acceso a la información pública como concluida, conforme a lo previsto en el artículo 155, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establece lo siguiente:

*"****Las solicitudes*** *anónimas, con nombre incompleto* ***o seudónimo******serán procedentes para su trámite por parte del sujeto obligado ante quien se presente.*** *No podrá requerirse información adicional con motivo del nombre proporcionado por el solicitante."*

Finalmente, se advierte que resulta procedente la interposición del recurso, según lo manifestado por la parte **Recurrente** en sus motivos de inconformidad, de acuerdo con el artículo 179, fracción V del ordenamiento legal citado, que a la letra dice:

*“****Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

*[…]*

***V. La entrega de información incompleta;***

*[…]”*

*(Énfasis añadido)*

**Tercero. Materia de la revisión.** De la revisión a las constancias y documentos que obran en el expediente electrónico se advierte que, el tema sobre el que este Organismo Garante de Transparencia y Acceso a la Información se pronunciará será: **verificar si la respuesta e informe justificado otorgados por el Sujeto Obligado son adecuados y suficientes para satisfacer el derecho de acceso a la información pública de la parte Recurrente,** o en su defecto, en caso de ser procedente, ordenar la entrega de información oportuna.

**Cuarto. Estudio del asunto.** Antes de entrar al análisis de los pronunciamientos del **Sujeto Obligado** en la respuesta proporcionada, es necesario mencionar que el derecho de acceso a la información está consagrado en instrumentos internacionales de los cuales el Estado Mexicano se ha adherido, sin oponer reserva alguna sobre lo que nos interesa, adoptando dichas disposiciones al Derecho Interno, específicamente a nivel Constitucional, tal y como lo prevén los arábigos 1 párrafos primero, segundo y tercero y 6 apartado A fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII que a la letra señalan:

***Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte****, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

***Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.***

***Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.*** *En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley*

*[…]*

***“Artículo 6o.***

*[...]*

***A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas,*** *en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

***I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes*** *Ejecutivo, Legislativo* ***y Judicial****, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal,* ***es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional,*** *en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

***II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.***

***III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública,*** *a sus datos personales o a la rectificación de éstos.*

***IV.*** *Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.*

***V.*** *Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.*

***VI.*** *Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.*

***VII.*** *La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. [...]”*

Esto es, que cualquier persona tiene el derecho al acceso de la información pública, información que consiste en aquella que sea generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, como así también lo señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios en su artículo 4, que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados, es pública y accesible, de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad, como así lo establece dicha determinación, que a continuación se transcribe para un mejor entendimiento:

*“****Artículo 4****. El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona****, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 29 como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

***Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes****.”*

Esto es, que los Sujetos Obligados tiene la obligación o deber de atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les hagan de su conocimiento y proporcionar la información pública que obren en su poder conforme el estado que se encuentra y no hacer un procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; como así lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que a la letra dice:

***“Artículo 12.-*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre****.* ***La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones”.***

Es decir, que todo sujeto obligado que genere, recopile, administre, procese, archive, posea o conserven, son responsables de la misma teniendo a su vez la obligación de proporcionar la información que se les requiera sin necesidad de resumirla, efectuar procedimientos para obtenerla, calcular y practicar investigaciones; en otras palabras, que los Sujetos Obligados solo se concretaran a proporcionar la información solicitada que tengan en su poder en el estado que se encuentran, sin necesidad de concretarse al interés o términos específicos del solicitante.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio 03-17, expuesto por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que dice:

*“****No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.*** *Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información”.*

En esa tesitura, el artículo 24 en su último párrafo de la Ley de la Materia, dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Siempre y cuando no se trate de información reservada o clasificada, que difundirla pondría en riesgo la seguridad jurídica y física del titular de la información, debiendo tener audacia los Sujetos Obligados para cuidar esta información a través del acuerdo clasificatorio del comité de transparencia y la versión pública que emita el servidor público habilitado de cada Sujeto Obligado; como así se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En conclusión, el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un documento en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico de conformidad con el artículo 3, fracción XI de la Ley de la materia, el cual señala lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas****,*** *resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico…”*

Siendo aplicable, el Criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente:

**“*CRITERIO 0002-11. INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3°, 4°, 11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*1) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

***2) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y***

***3) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”***

De ahí que el **Sujeto Obligado** cuenta con el deber de satisfacer las solicitudes de acceso a la información que le sean formuladas y entregar la información pública que obre en sus archivos pudiendo ser de manera electrónica; más aún si la misma se trata de información relativa a obligaciones de transparencia, la cual se relaciona con aquella que se genere de acuerdo con sus facultades, atribuciones y obligaciones señaladas por la Ley en la materia[[1]](#footnote-0), así como de interés público, es decir, aquella que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, y cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los Sujetos Obligados[[2]](#footnote-1), como pudiera tratarse de aquella relacionada con las obligaciones de transparencia señaladas en los artículos 92 y 100 de la Ley de la Materia.

Dicho lo anterior, en el caso se analizará el agravio hecho valer por la parte **Recurrente** que actualiza la causal de procedencia prevista en la fracción V del artículo 179 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios, relativa a **la entrega de información incompleta.**

Para efecto de lo anterior, por cuestión de método se estima pertinente insertar el siguiente cuadro de análisis, en los que se precisarán los requerimientos medulares de la persona solicitante, respuesta emitida y el informe justificado rendido por el **Sujeto Obligado,** como se sigue:

| **No.** | **Requerimiento** | **Respuesta** | **Informe Justificado** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **El expediente sobre la gasolinera que se está construyendo en el popo park.** | El Director Municipal de Desarrollo Urbano, informó que, en lo relativo a la solicitud del expediente de una Gasolinera que se está construyendo en Popo Park, localidad del Municipio de Atlautla, el predio se localiza de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Atlautla vigente, publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 11 de octubre de 2021, en una zona marcada como CRU-200-A y CRU-T, que son Corredores Urbanos densidad 200 y corredor urbano Turístico, que en su uso b-19 marcado en las tablas de usos del suelo en la especificación de uso General del suelo se tiene el uso de Gasolinera y su uso específico de Estaciones de Servicios, Almacenamiento y Expendio de Disel y Gasolina, cuyo uso es permitido de acuerdo al plan vigente.  Asimismo, adjuntó: Licencia de Construcción de Barda Perimetral, expedida dentro del expediente 019, en fecha 22 de junio del 2023; Licencia de Excavación, expedida dentro del expediente 001, en fecha 05 de julio del 2023; Constancia de Alineamiento, Folio 019, de fecha de 19 de noviembre de 2022; y, Constancia de Numero Oficial de fecha 22 de noviembre de 2022; todas expedidas por el Director de Desarrollo Urbano. | **No se aportó información** |
| **2** | **Los acuerdos que ha tenido el presidente con los pobladores para no seguir bloqueando la carretera.** | **No se aportó información sobre estos puntos.** | En informe el Director de Gobierno Municipal proporciona un oficio del treinta de octubre de dos mil veintitrés, a través del cual informa los acuerdos a los que llegó el Presidente Municipal con los pobladores de la delegación de PoPo Park, para no seguir bloqueando la carretera federal México-Cuautla, con respecto al tema de la construcción de la gasolinera, como se expuso en el antecedente sexto de la presente resolución. |
| **3** | **La opinión del Director Jurídico y de Gobierno sobre la gasolinera si cumple con los requisitos que ordena la ley tanto federales, estatales y municipales y de quien es competencia el otorgar esos permisos.** | **No se aportó información sobre estos puntos.** |
| **4** | **Del Director Jurídico y de Gobierno, sobre los horarios que trabaja en el Ayuntamiento de Amecameca.** |
| **5** | **Del Director Jurídico y de Gobierno, sobre los horarios que trabaja en el Ayuntamiento de Atlautla.** |
| **6** | **La forma de pago, sueldo, cfdi de abril a julio de dos mil veintitrés al Director Jurídico y de Gobierno.** |
| **7** | **Pronunciamiento del Director Jurídico y de Gobierno sobre si no viola alguna ley como servidor público.** |

De lo anterior, se desprende que el **Sujeto Obligado** emitió pronunciamiento tanto en respuesta como en informe sobre los requerimientos analizados bajo los numerales **1 y 2**.

Así, una vez notificada la respuesta, la persona solicitanteinterpuso el recurso de revisión que nos ocupa, en el cual se advierte que la inconformidad no versa sobre la totalidad de los puntos requeridos ni sobre la información remitida en respuesta para atender el primero de ellos, pues solo se advierte que se hicieron valer como agravios la falta de entrega de la información precisada en los numerales del 3 al 7;por lo que, los requerimientos marcados en los numerales 1 y 2 deben declararse consentidos, al no haberse realizado manifestaciones de inconformidad al respecto, y por tanto no pueden producirse efectos jurídicos tendentes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado, ya que, en el caso concreto se infiere que la información proporcionada por el **Sujeto Obligado**, satisface los requerimientos indicados.

Lo anterior es así, debido a que cuando la parte **Recurrente** impugna la respuesta del **Sujeto Obligado**, y este no expresa Razón o Motivo de Inconformidad en contra de todos los rubros solicitados, dichos rubros deben declararse atendidos, pues se entiende que la parte **Recurrente** ésta conforme con la información entregada al no contravenir la misma. Sirve de Apoyo a lo anterior, por analogía la Tesis Jurisprudencial Número 3ª./J.7/91, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 174,177, que establece lo siguiente:

***“REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES.*** *Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente.”*

Consecuentemente, se insiste, ante la falta de impugnación eficaz, la respuesta entregada debe declararse consentida por la persona solicitante.

Lo anterior se sustenta con lo plasmado en el criterio 01/20 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales, INAI, que lleva por rubro y texto los siguientes:

*“****Actos consentidos tácitamente. Improcedencia de su análisis.*** *Si en su recurso de revisión, la persona recurrente no expresó inconformidad alguna con ciertas partes de la respuesta otorgada, se entienden tácitamente consentidas, por ende, no deben formar parte del estudio de fondo de la resolución que emite el Instituto.”*

Asimismo, resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial número VI.3o.C. J/60, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 176,608 que a la letra dice:

***“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.*** *Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.”*

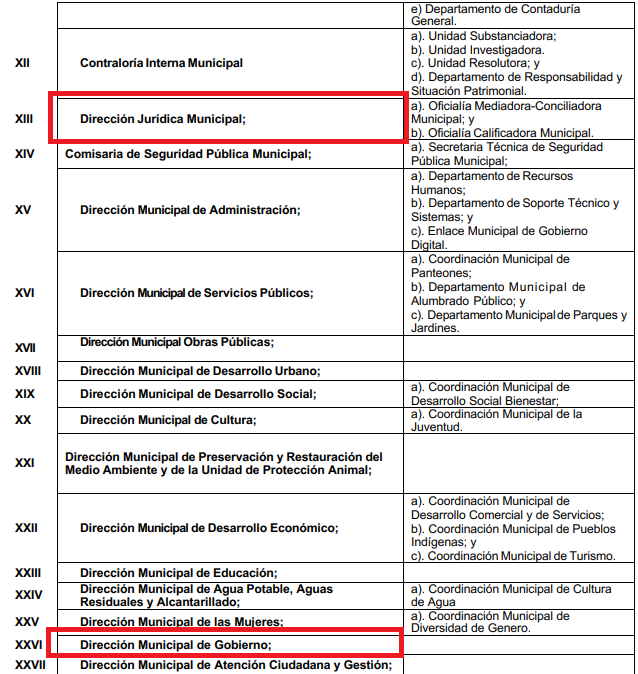
Por lo tanto, el estudio de la presente resolución versará en la falta de entrega de los requerimientos marcados en los numerales del 3 al 7 del cuadro de análisis inserto, mismos que se analizarán bajo los siguientes apartados:

* + - 1. **De la opinión del Director Jurídico y de Gobierno sobre la gasolinera si cumple con los requisitos que ordena la ley tanto federales, estatales y municipales y de quien es competencia el otorgar esos permisos; y, pronunciamiento sobre si no viola alguna ley como servidor público.**

Sobre los requerimientos de nuestra atención, en primer lugar, es de indicar que conforme el artículo 47 del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2023, el Ayuntamiento de Atlautla cuenta dentro de su estructura orgánica con diversas dependencias generales para el correcto desempeño de sus atribuciones, entre las cuales se encuentran: la Dirección Municipal de Gobierno y la Dirección Jurídica, como se muestra:

***“Artículo 47. La Administración Pública Municipal, se auxiliará de las siguientes Dependencias Generales y Dependencias Auxiliares:***

[…]



[…]”

(Énfasis añadido)

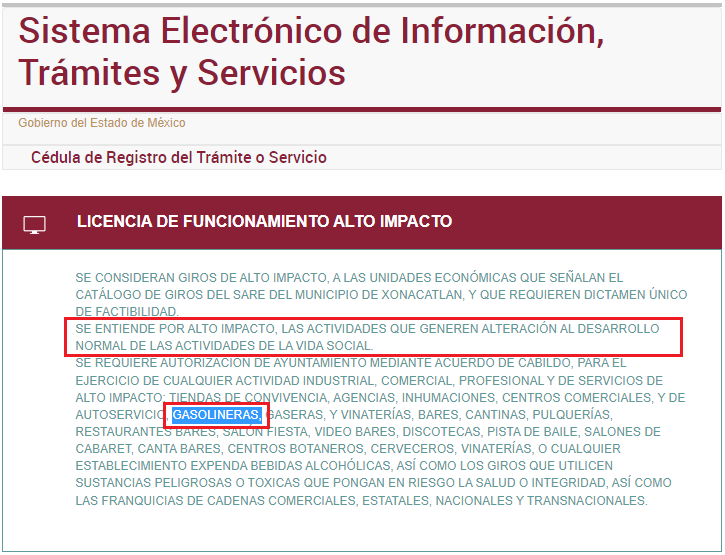
Por lo tanto, la opinión requerida por el particular sería tanto del **Director Jurídico como del Director Municipal de Gobierno**, así como el pronunciamiento de los mismos si como servidores públicos violan alguna ley.

Precisado lo anterior, atendiendo la naturaleza de la información requerida relativa a **la opinión del Director Jurídico y del Director Municipal de Gobierno sobre si la gasolinera señalada en la solicitud cumple con los requisitos que ordena las leyes federales, estatales y municipales**, resulta conveniente señalar lo siguiente:

En principio, se advierte que la opinión que requiere el particular de los servidores públicos indicados, son con relación al cumplimiento de los requisitos para el establecimiento de una gasolinera en un predio ubicado en el Municipio de Atlautla.

Por lo tanto, es necesario señalar que una gasolinera, entra dentro de la clasificación como una unidad económica de alto impacto, pues la misma genera una alteración al desarrollo normal de las actividades de la vida social, y para su funcionamiento se requiere de la expedición de la licencia de funcionamiento correspondiente.

Como referencia de lo anterior, se localizó la Cédula de Registro del Trámite o Servicio contenido en el Sistema Electrónico de Información de Trámites y Servicios del Gobierno del Estado de México, relativo a las unidades económicas de alto impacto que requieren una Licencia de funcionamiento de alto impacto:



De lo anterior, se desprende que, en efecto una gasolinera al ser una unidad económica de alto impacto, requiere para su funcionamiento una licencia.

Por lo tanto, a efecto de verificar la procedencia de la entrega de la información, resulta necesario puntualizar si dentro de los requisitos para otorgar una licencia de funcionamiento para este tipo de unidades económicas se requiere contar con la opinión requerida por la persona solicitante de los servidores públicos municipales indicados.

Para efecto de lo anterior, conviene citar el contenido de los siguientes artículos 2, fracciones XV, 4 fracción VIII, 7 fracción V, 16 fracción II y 66 de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, que a la letra disponen lo siguiente:

***“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:***

*[…]*

***XV. Licencia de funcionamiento:*** *Al acto administrativo que emite la autoridad, por el cual autoriza a una persona física o jurídica colectiva a desarrollar actividades económicas.*

*[…]*

***Artículo 4. Son autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley las siguientes:***

*[…]*

*VIII. Ayuntamientos.*

*[…]*

***Artículo 7. Corresponde a los municipios:***

*[…]*

*V****. Resguardar y actualizar el archivo físico y digital con los documentos requeridos por las leyes para la expedición y refrendo de las licencias correspondientes.***

*[…]”*

*“****Artículo 16. Las ventanillas, en los diferentes ámbitos de su competencia, gestionarán los trámites siguientes:***

*[…]*

***II. Licencias***

*[…]”*

***“DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER PERMISO O LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE MEDIANO Y ALTO IMPACTO***

***Artículo 66. Para la obtención de un permiso o licencia de funcionamiento, los solicitantes o representante legal tendrán que cumplir los requisitos siguientes:***

*I. Solicitud en la que se señale la razón social del solicitante, así como domicilio para oír y recibir notificaciones y dirección de correo electrónico para los efectos de esta Ley. En caso de que el solicitante sea persona física se cotejarán los datos de la credencial para votar con fotografía.*

*II. Actividad económica que se pretende operar.*

*III. Datos de la licencia de uso del suelo que señale el permitido para la actividad económica que se pretende operar.*

*IV. Que cuenta con los cajones de estacionamiento que determine la autoridad correspondiente.*

*V. La capacidad de aforo respectiva.*

*VI. Dar cuenta del programa interno de protección civil.*

*VII. Dictamen de Giro o permiso, en su caso, emitido por la autoridad municipal.*

*VIII. Para el caso de las unidades económicas de alto impacto deberá manifestar que cuenta con el sistema de seguridad a que hace referencia esta Ley.*

*Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo y en caso de ser procedente el permiso o licencia de funcionamiento, la autoridad hará del conocimiento al solicitante o representante legal el monto a cubrir por los derechos correspondientes, una vez cubiertos se otorgará el permiso o licencia de funcionamiento.”*

*(Énfasis añadido)*

De las porciones legales citadas, se desprende que una licencia de funcionamiento es un acto administrativo que emite la autoridad, por el cual autoriza a una persona física o jurídica colectiva a desarrollar actividades económicas.

Consecuentemente, corresponde a los municipios, como lo es el Municipio de Atlautla, resguardar y actualizar el archivo físico y digital con los documentos requeridos por las leyes para la expedición de las licencias correspondientes.

Así, dentro de los requisitos para obtener una licencia de funcionamiento para las unidades de alto impacto como lo es una gasolinera, se encuentran los siguientes:

* Solicitud en la que se señale la razón social del solicitante, así como domicilio para oír y recibir notificaciones y dirección de correo electrónico para los efectos de esta Ley. En caso de que el solicitante sea persona física se cotejarán los datos de la credencial para votar con fotografía.
* Señalar la actividad económica que se pretende operar.
* Proporcionar los datos de la licencia de uso del suelo que señale el permitido para la actividad económica que se pretende operar.
* Indicar que se cuenta con los cajones de estacionamiento que determine la autoridad correspondiente.
* Señalar la capacidad de aforo respectiva.
* Dar cuenta del programa interno de protección civil.
* Exhibir el dictamen de Giro o permiso, en su caso, emitido por la autoridad municipal.
* Para el caso de las unidades económicas de alto impacto se deberá manifestar que se cuenta con el sistema de seguridad a que hace referencia la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México.

Por lo tanto, atendiendo lo señalado en los numerales citados, los requisitos citados, deben ser resguardados por los Municipios para la expedición de las licencias correspondientes.

Bajo esa guisa, se advierte que, si bien es una atribución de los Municipios resguardar los documentos requeridos para la obtención de la licencia de funcionamiento para unidades económicas; también lo es que dentro de los requisitos para obtener dicha licencia no se advierte que el Titular o interesado en la obtención de la misma deba exhibir una opinión emitida por la Dirección Jurídica y la Dirección de Gobierno Municipal en la que se señale si la unidad económica -gasolinera- cumple con los requisitos que ordena la ley tanto federales, estatales y municipales.

De esta manera, atendiendo que no existe fuente obligacional que constriña al **Sujeto Obligado** a poseer y/o administrar el documento donde conste la opinión del Director Jurídico y del Director Municipal de Gobierno sobre si la gasolinera cumple con los requisitos que ordenan las leyes federales, estatales y municipales, es que existe impedimento para ordenar el mismo.

Situación la anterior que, de igual manera ocurre con el pronunciamiento que requiere la persona solicitante sobre si el Director Jurídico y el Director Municipal de Gobierno no viola alguna ley como servidor público; pues del análisis a la normatividad que regula al **Sujeto Obligado** no se advierte que este tenga la obligación de generar un documento con las características requeridas.

Por lo tanto, la pretensión de la persona solicitante es obtener un pronunciamiento específico respecto de dos situaciones planteadas, lo cual implicaría que el **Sujeto Obligado** genere un documento ad hoc, es decir que elabore una expresión documental que atienda lo peticionado, y por tal razón es necesario traer a colación los artículos 2°, fracción II; 3°, fracción XI y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales disponen lo siguiente:

* Que uno de los objetivos de la Ley es proveer lo necesario para garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información pública, y
* Que los **documentos** son los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o **cualquier registro que documente el ejercicio de facultades, funciones y competencia** de los Sujetos Obligados, sin importar su fuente y fecha de elaboración y, por último, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generan. En este orden de ideas, puede concluirse que la Ley de la manera, es una ley de acceso a documentos.

Por lo anterior, resulta importante traer a colación lo que establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual señala que los sujetos obligados únicamente están constreñidos a entregar los documentos que obren en sus archivos en el estado en que estos se encuentren, lo que no comprende entregar la información conforme al interés del solicitante.

De tales circunstancias, se colige que los sujetos obligados únicamente están constreñidos a proporcionar **la documentación que obre en sus archivos**; por lo que, no están obligados a generar o elaborar documentos *ad hoc,*como es el caso de proporcionar los documentos que atiendan los requerimientos formulados por la hoy parte **Recurrente.**

Robustece lo anterior el Criterio de Interpretación, con clave de control SO/013/2017, de la Segunda Época, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a continuación se cita:

***No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.*** *Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.*

Es por lo anteriormente expuesto, **que se advierte que lo requerido no constituye un derecho de acceso a la información** y, por lo tanto, no es atendible mediante una solicitud de acceso a la información pública, ya que se trata de una petición formulada por la parte Solicitante, **situación que conlleva a afirmar que se está en presencia del ejercicio del derecho a la libre expresión y en todo caso a un derecho de petición.**

A efecto de sustentar lo anterior, es preciso mencionar que David Cienfuegos Salgado, concibe al derecho de petición como *“****el derecho de toda persona a ser escuchado por quienes ejercen el poder públic****o.”*

De la misma manera, Miguel Carbonell en su libro *“Los derechos fundamentales”* refiere que el derecho de petición se ha entendido de dos distintitas maneras, a saber: como un derecho fundamental de participación política ya que permite a los particulares trasladar a las autoridades sus **inquietudes, quejas**, sugerencias y requerimientos en cualquier materia o asunto; y como una **forma específica de la libertad de expresión**, en tanto que permite expresarse frente a las autoridades.

De igual forma, el derecho de petición se traduce en la obligación de todos los funcionarios y autoridades de permitir a los ciudadanos de dirigirse a ellos en demanda de lo que deseen expresar o solicitar y responder de dicha demanda por escrito, de forma congruente y en un plazo breve.

Por otro lado, el autor anteriormente citado, indica que el **derecho de acceso a la información pública** es el derecho de conocer la información de carácter público que se genera o está en posesión de los órganos del poder público o de los sujetos que utilizan o se benefician con recursos provenientes del Estado, es el derecho que tienen los ciudadanos para acceder a documentos y datos que obren en el poder del gobierno.

Por su parte, Ernesto Villanueva define al derecho de acceso a la información pública como la prerrogativa de la persona para acceder a datos, registros y todo tipo de informaciones en poder de las entidades públicas y empresas privadas que ejercen gasto público o cumplen funciones de autoridad, con las excepciones taxativas que establezca la ley en una sociedad democrática.

De lo anterior, se puede concluir que la distinción entre el **derecho de petición** y el derecho de acceso a la información descansa, principalmente, en que **la pretensión del peticionario consiste generalmente en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado mediante la elaboración de un informe detallada**, mientras que en el derecho de acceso a la información pública la pretensión radica en que se permita el acceso a datos y todo tipo de documentación que tenga el carácter de información pública, que sea generada, administrada o se encuentre en posesión de los considerados Sujetos Obligados por la Ley de la Materia.

En tal virtud, los requerimientos de nuestra atención consisten en un ejercicio del derecho de petición, y no son atendibles vía acceso a la información.

* + - 1. **Pronunciamiento sobre quién es la autoridad competente para otorgar los permisos para la gasolinera referida en la solicitud.**

Sobre este punto, es de indicar que, conforme lo analizado en el apartado que antecede, el documento que se expide para la operación de una unidad económica de alto impacto como lo es una gasolinera, se requiere una licencia de funcionamiento.

Asimismo, en cuanto a la interrogante de la persona solicitante, relativa a quien es la autoridad competente para emitir, en este caso, la licencia de funcionamiento para la gasolinera sobre la cual versa la solicitud de información, de la normatividad que regula al **Sujeto Obligado** no advierte fuente obligacional que lo constriña a generar una expresión documental que atienda el cuestionamiento de referencia.

Se afirma lo anterior, pues en los mismos términos señalados el apartado que antecede, se advierte que la petición formulada por la parte Solicitante, conlleva a afirmar que se está en presencia del ejercicio del derecho a la libre expresión y en todo caso a un derecho de petición, pues la misma requiere un pronunciamiento del **Sujeto Obligado** relativo a contestar una determinada circunstancia que se atendería mediante la elaboración de un documento ad hoc, al cual no está obligado a generar.

No obstante, en el presente caso, conviene citar el contenido de los artículos 2, fracción XXXVII y 14 de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México:

*“****Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:***

*[…]*

*XXXVII.* ***Ventanilla de gestión: Al órgano administrativo de la Secretaría de Desarrollo Económico.***

*[…]”*

*“****Artículo 14. La ventanilla de gestión conocerá de los trámites de las unidades económicas de alto y mediano impacto****.”*

*(Énfasis añadido)*

Como se desprende de lo anterior, es la **ventanilla de gestión** a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, quien conocerá sobre trámites como lo es la licencia de funcionamiento de unidades de alto impacto como lo es la gasolinera sobre la cual versa la solicitud de información; y, por tanto, se desprende que quien es la autoridad competente para atender dicho trámite es la Secretaría indicada.

Lo anterior, pues atendiendo lo puntualizado en el apartado que antecede, a los municipios, por cuanto hace al trámite de la licencia de funcionamiento de unidades económicas de alto impacto, únicamente le compete resguardar las documentales donde constan los requisitos para la obtención de la licencia de mérito.

* + - 1. **Del Director Jurídico y del Director Municipal de Gobierno, los horarios laborales que tienen en el Ayuntamiento de Amecameca y los recibos de nómina por trabajar en dicho ente público.**

Al respecto, es menester de este Organismo Garante precisar que la solicitud de información que dio origen al recurso de revisión que se resuelve fue dirigida al Ayuntamiento de Atlautla, como se desprende del primer antecedente de la presente resolución; no obstante, del análisis al requerimiento, se advierte que el mismo está relacionado con información en posesión de otro sujeto obligado, como lo es el Ayuntamiento de Amecameca.

Se afirma lo anterior, en virtud de que del contenido de la solicitud se desprende que la persona solicitante requiere acceder a los horarios en que trabaja el Director Jurídico y el Director Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Atlautla, en el Ayuntamiento de Amecameca; por lo que, este Órgano Garante al desconocer si los servidores públicos que fungen como titulares de dichas direcciones también trabajan para este último, es que se considera que nos encontramos en presencia de una notoria incompetencia.

No obstante, atendiendo a que el **Sujeto Obligado** fue omiso en realizar pronunciamiento alguno sobre el requerimiento en análisis, es menester de este Instituto señalar lo siguiente:

En principio, el derecho de acceso a la Información Pública y el procedimiento para su acceso debe ser claro y preciso, a fin de dotar de certeza jurídica a todas las respuestas proporcionadas por los Sujetos Obligados.

Así, para efectos de la materia de transparencia y acceso a la información pública, no debe dejar de observarse que, en fecha 14 de octubre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, aprueba el **Padrón de Sujetos Obligados en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios**, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación; esto es, el 15 de octubre de 2020.

Dicho Padrón permite identificar plenamente a los Sujetos Obligados que deben cumplir con las obligaciones, procesos, procedimientos, y responsabilidades establecidas tanto en la Ley General de Transparencia como en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de nuestra entidad y por este Organismo Garante, en los términos que las mismas determinen.

Así, de dicho ordenamiento normativo, se advierte como Sujetos Obligados distintos al Ayuntamiento de Amecameca y al Ayuntamiento de Atlautla, como parte de los Sujetos Obligados de Competencia Municipal, sin que las modificaciones al Padrón publicadas en la Gaceta del Gobierno, en fechas 27 de noviembre de 2017, 23 de enero de 2019, 07 de agosto de 2019, 14 de octubre de 2020, 22 de marzo de 2021, 7 de junio de 2021, 29 de noviembre de 2021, 7 de abril de 2022, 19 de agosto de 2022 y 9 de marzo de 2023, modificaran dicha situación, como se muestra a continuación:

*“PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS*

*…*

*VIII. SUJETOS OBLIGADOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL*

*…*

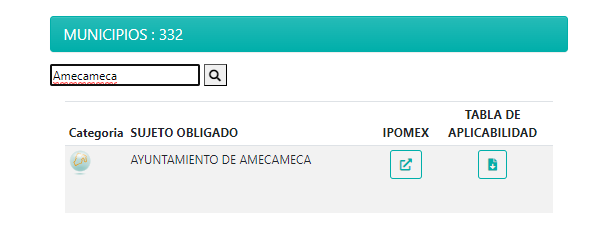
***135. Amecameca***

*…*

***141. Atlautla***

*…”*

Aunado a ello, del portal de la Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), se advierte que elAyuntamiento de Amecameca es un **Sujeto Obligado** diverso al Ayuntamiento de Atlautla, que cuenta con su propia Unidad de Transparencia, tal como se ilustra:



Por tanto, se acredita que el Ayuntamiento de Amecameca de mérito es el competente para conocer del requerimiento de nuestra atención.

Atento a lo anterior, cabe recordar que los artículos 12 y 24 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, consagran la obligación de los Sujetos Obligados de hacer entrega de la información que en ejercicio de sus facultades, funciones y atribuciones, recopile, genere, o administre, por lo que **al tenerse por acreditado que** **el Ayuntamiento de Amecameca es un sujeto obligado diferente,** resulta fácticamente imposible que el **Sujeto Obligado**, haga entrega de información que no genera, administra o posee.

Derivado de lo expuesto, es claro que existe una notoria incompetencia por parte del **Sujeto Obligado** para dar respuesta al requerimiento en análisis; **circunstancia que de acuerdo a las constancias que obran en el expediente electrónico aperturado con motivo del medio de impugnación que nos ocupa, no se advierte que dicho ente público lo hiciera del conocimiento de la persona solicitante, ni tampoco lo hubiera comunicado dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud de información;** incumpliendo así con el párrafo primero del artículo 167, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que es del tenor literal siguiente:

*“****Artículo 167****. C****uando las unidades de transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados,*** *dentro del ámbito de aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información,* ***deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud*** *y, en su caso orientar al solicitante, el o los sujetos obligados competentes.”*

Del precepto normativo se desprende que cuando las Unidades de Transparencia, determinen una notoria incompetencia por parte de los entes públicos, deben realizar lo siguiente:

* Hacerlo del conocimiento de la persona solicitante, dentro de los tres días hábiles, posteriores a la presentación de la solicitud de información, y
* En caso de conocer el Sujeto Obligado competente, orientarle a presentar la solicitud ante el mismo.

En el presente caso, como se indicó, no existe constancia que permitiera advertir que el **Sujeto Obligado** cumpliera con dichos requisitos.

Por lo que, atendiendo a que el **Sujeto Obligado** no dio cumplimiento al requisito de hacer del conocimiento de la persona solicitante la notoria incompetencia del requerimiento de nuestra atención, dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud, ni que se hubiera orientado a la persona solicitante sobre el sujeto obligado competente para atender lo peticionado, es que se hace necesario la emisión del acuerdo por el que el Comité de Transparencia confirme la declaratoria de la información requerida consistente en: el o los documentos donde consten los horarios laborales de los servidores públicos titulares de la Dirección Jurídica y la Dirección Municipal de Gobierno en el Ayuntamiento de Amecameca; resultando aplicable lo dispuesto por los artículos 49, fracción II, 53, fracción III y 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Preceptos de los cuales se desprende que las **Unidades de Transparencia son responsables de orientar a los particulares respecto de la dependencia, entidad u órgano que pudiera tener la información requerida, cuando la misma no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se formule la solicitud de acceso**.

Asimismo, que los **Comités de Transparencia tienen entre sus atribuciones confirmar, modificar o revocar la declaración de incompetencia** que realicen los titulares de las unidades administrativas.

Por lo que, cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de **los sujetos obligados deberán comunicar al solicitante la misma dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud**.

Como se logra observar, si bien la Ley de la materia, prevé el supuesto de incompetencia para que los sujetos obligados den atención a solitudes de información, también lo es, que no se precisa en que consiste dicho concepto; al respecto, Cabanellas, Guillermo (1993), en el “Diccionario Jurídico Elemental” (p. 32 y 161), precisó los siguientes conceptos:

• Competencia: La capacidad de una autoridad para conocer sobre una materia o asunto.

• Incompetencia: Falta de Competencia.

Por lo que, la incompetencia radica en la incapacidad de una autoridad para conocer de un tema o asunto; en el mismo sentido, conviene traer a cuenta tesis aislada número III.2o.P.11 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, Pág. 1243, ya que precisa lo siguiente:

*“****LEGITIMACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. LOS TRIBUNALES DE AMPARO, POR ESTAR VINCULADOS CON EL CONCEPTO DE COMPETENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, NO PUEDEN CONOCER DE AQUÉLLA.*** *El artículo 16 constitucional se refiere a la competencia que tienen las autoridades para conocer de determinadas conductas en particular, caso que corresponde a la esfera de atribuciones de las autoridades cuya competencia constituye el análisis del Poder Judicial de la Federación, mas no la forma en que una autoridad fue elegida o integrada, circunstancia que le compete estudiar a la autoridad individual o colegiada que otorgó el nombramiento o, en todo caso, el régimen establecido para ello, porque el precitado artículo constitucional no se refiere a la legitimación de un funcionario, ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que consagra una garantía individual y no un control interno de la organización administrativa.”*

Asimismo, resulta necesario traer a colación, el Criterio 13/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que dispone lo siguiente:

***Incompetencia****. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara.*

En tal virtud, la incompetencia implica que, de conformidad con las atribuciones conferidas al **Sujeto Obligado**, no habría razón por la cual éste deba contar con la información solicitada, en cuyo caso, tendría que orientar al particular para que acuda a la instancia competente.

Por lo que el **Sujeto Obligado** a través de su Comité de Transparencia debe confirmar la incompetencia que en el presente asunto encuadra en el supuesto de la Ley, es decir se deberá elaborar el acuerdo mediante el cual se confirme la incompetencia respecto lo peticionado en este punto por la parte **Recurrente**, debiendo notificarle de igual forma el Acuerdo de referencia.

Por otra parte, ante la incompetencia, el **Sujeto Obligado** tiene la potestad de orientar al particular sobre la dependencia pública ante quien deba presentar su solicitud de información; situación que en el caso concreto dicho ente público tampoco cumplió.

En este orden de ideas, se dejan a salvo los derechos de la parte **Recurrente** para que formule una nueva solicitud de información ante el **Sujeto Obligado** competente, para lo cual deberá señalar de manera precisa la información que es de su interés.

Por lo tanto, a consideración de este Organismo Garante, lo procedente para atender este punto de la solicitud es ordenar la entrega de lo siguiente:

* Acuerdo que emita el Comité de Transparencia mediante el que confirme la declaratoria de incompetencia del **Sujeto Obligado**, respecto de la información consistente en: el o los documentos donde consten los horarios laborales y recibos de nómina de los servidores públicos titulares de la Dirección Jurídica y la Dirección Municipal de Gobierno por su empleo en el Ayuntamiento de Amecameca.
  + - 1. **Del Director Jurídico y del Director Municipal de Gobierno, los horarios en que trabajan en el Ayuntamiento de Atlautla.**

Sobre la naturaleza de la información solicitada, conviene traer a contexto el contenido de los artículos 5 y 49 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, los cuales textualmente refieren lo siguiente:

*“ARTÍCULO 1.-* ***Ésta ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las relaciones de trabajo, comprendidas entre*** *los poderes públicos del Estado y* ***los Municipios*** *y sus respectivos servidores públicos.*

*…”*

*“ARTÍCULO 5.-* ***La relación de trabajo entre las instituciones públicas y sus servidores públicos se entiende establecida mediante nombramiento, formato único de movimiento de personal, contrato o por cualquier otro acto que tenga como consecuencia la prestación personal subordinada del servicio y la percepción de un sueldo****. Para los efectos de esta ley, las instituciones públicas estarán representadas por sus titulares.*

***ARTÍCULO 49.- Los nombramientos, contratos o formato único de Movimientos de Personal de los servidores públicos deberán contener:***

***I. Nombre completo del servidor público;***

***II. Cargo para el que es designado, fecha de inicio de sus servicios y lugar de adscripción;***

*III. Carácter del nombramiento, ya sea de servidores públicos generales o de confianza, así como la temporalidad del mismo;*

*IV. Remuneración correspondiente al puesto;*

***V. Jornada de trabajo;”***

*(Énfasis añadido)*

De lo anterior, se advierte que la Ley de mérito, tiene como finalidad regular las relaciones de trabajo, entre otros, en los municipios; las cuales se entienden establecidas **mediante nombramiento**, formato único de movimiento de personal, contrato o por cualquier otro acto que tenga como consecuencia la prestación personal subordinada del servicio y la percepción de un sueldo.

Así, en el caso de nuestra atención, resulta relevante el nombramiento, en virtud de que el mismo, además de acreditar la relación laboral entre un servidor público y el ente público municipal, de los elementos que lo integran **se encuentra la jornada laboral, es decir el horario que deberá cumplir el servidor público con motivo de su encargo.**

Por lo tanto, se advierte que el nombramiento constituye el documento idóneo para dar atención al requerimiento relativo a los horarios de trabajo de los servidores públicos titulares de la Dirección Jurídica y el Director Municipal de Gobierno.

En consecuencia, ante la falta de pronunciamiento por parte del **Sujeto Obligado** sobre el requerimiento de nuestra atención, este Organismo Garante considera dable ordenar la entrega de la siguiente información, de ser procedente en versión pública:

* El o los documentos donde conste el horario laboral de los servidores públicos titulares de la Dirección Jurídica y de la Dirección Municipal de Gobierno, que se encontraban a cargo a la fecha de la solicitud, esto es, al catorce de agosto de dos mil veintitrés.
  + - 1. **La forma de pago, sueldo, cfdi de abril a julio de dos mil veintitrés del Director Jurídico y del Director Municipal de Gobierno.**

Sobre este punto, se procede al análisis de la naturaleza de la información solicitada, para lo cual conviene precisar que si bien el término “*nómina”* no está definido en nuestra legislación, también lo es que el “Glosario de Términos para el Proceso de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación en la Administración Pública”, elaborado por el Grupo de Trabajo de Sistemas de Información Financiera, Contable y Presupuestal de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), la definen como el *listado general de los trabajadores de una institución, en**el cual se* ***asientan las percepciones brutas, deducciones y alcance neto de las mismas****; la nómina es utilizada para* ***efectuar los pagos periódicos*** *(semanales, quincenales o**mensuales) a los trabajadores por concepto de* ***sueldos y salarios****.*

Documento o término que ha sido mencionado en diferentes ordenamientos legales, tal es el caso, de la *Ley Federal del Trabajo* en el artículo 804 fracción II, que además reconoce los recibos de pagos de salarios, por lo que resulta indispensable citar el artículo de referencia.

***“Artículo 804.-*** *El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan:*

***…***

***II.******Listas de raya o nómina de personal****, cuando se lleven en el centro de trabajo;* ***o recibos de pagos de salarios;***

*…*

*Los documentos señalados en la fracción I deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados en las fracciones* ***II****, III y IV, durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral; y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las Leyes que los rijan.”*

De lo anteriormente citado, se puede llegar a la conclusión de que la nómina, es el documento que contiene el registro de los trabajadores a los cuales se va a remunerar por los [servicios](http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml) que éstos le prestan al patrón, en el cual **se asientan las percepciones brutas, deducciones y el neto** a recibir de dichos trabajadores.

Ahora bien, relativo a los **recibos de nómina**, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios hace referencia a los comprobantes que las instituciones públicas realizan para documentar el pago de salarios, prima vacacional, aguinaldo y demás prestaciones otorgadas a un servidor público, denominándose "recibos o comprobantes de pago", los cuales constituyen un instrumento mediante el cual el sujeto obligado acredita las remuneraciones al personal y, que de acuerdo al uso implantado en la colectividad se denominan "recibos de nómina".

A efecto de robustecer lo anterior, es preciso hacer alusión, en primera instancia, a lo establecido en las normas de carácter general del **Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México***,* en donde se señala que el Régimen Fiscal para las entidades públicas es el correspondiente a *personas morales con fines no lucrativos,* y en segundo lugar remitirnos al párrafo séptimo del artículo 86 del Título III del Régimen de las Personas Morales con fines no lucrativos, de la **Ley del Impuesto Sobre la Renta***,* que a la letra señala lo siguiente:

***“Artículo.- 86***

***(****…)*

*Los partidos y asociaciones políticas, legalmente reconocidos, la Federación, las entidades federativas,* ***los municipios*** *y las instituciones que por Ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación y los organismos descentralizados que no tributen conforme al Título II de esta Ley* ***están obligados a expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por concepto de salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado, en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago*** *para efectos de la legislación laboral a que se refieren los artículos 132 fracciones VII y VIII, y 804 primer párrafo fracciones II y IV de la Ley Federal del Trabajo…*”

Del precepto citado, se advierte que los municipios al ser entes públicos se encuentran constreñidos a expedir y entregar los **comprobantes fiscales correspondientes a las personas que reciban pagos por conceptos de salarios,** mismos que pueden ser utilizados como **constancia o** **recibo de pago**, de conformidad con los artículos 132 fracciones VII y VIII de la **Ley Federal del Trabajo**, que a la letra señalan lo siguiente:

***“Artículo 132****.- Son* ***obligaciones de los patrones****:*

*(…)*

*VII.-* ***Expedir*** *cada quince días, a solicitud de los trabajadores, una* ***constancia*** *escrita del número de días trabajados y* ***del salario percibido****;*

*VIII.- Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa, dentro del término de tres días, una constancia escrita relativa a sus servicios;*

*…”*

Por su parte la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en su artículo 220-K fracciones II y IV y último párrafo, establecen lo siguiente:

***“ARTÍCULO 220 K.-*** *La institución o dependencia pública tiene la obligación de conservar y exhibir en el proceso los documentos que a continuación se precisan:*

*(…)*

*II.* ***Recibos de pagos de salarios*** *o las constancias documentales del pago de salario cuando sea por depósito o mediante información electrónica;*

*(…)*

*IV. Recibos o las constancias de depósito o del medio de información magnética o electrónica que sean utilizadas para el pago de salarios, prima vacacional, aguinaldo y demás prestaciones establecidas en la presente ley; y…*

*Los documentos señalados en la fracción I de este artículo, deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados por las fracciones II, III, IV durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan.*

*Los documentos y constancias aquí señalados, la institución o dependencia podrá conservarlos por medio de los sistemas de digitalización o de información magnética o electrónica o cualquier medio descubierto por la ciencia y las constancias expedidas por el encargado del área de personal de éstas, harán prueba plena.*

*El incumplimiento por lo dispuesto por este artículo, establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, en relación con tales documentos, salvo prueba en contrario.”*

Sobre la base del precepto legal citado, se advierte que toda institución pública o dependencia pública del Estado de México debe conservar las constancias de pago de salarios, prima vacacional, aguinaldo y demás prestaciones legales de acuerdo con la forma en que se haya realizado el pago; es decir, en efectivo, cheque, depósito, transferencia u otra, debiendo conservar dicha documentación durante el último año y un año después de que se extingue la relación laboral a través de los sistemas de digitalización o de información magnética o electrónica.

Por tanto, los *recibos de nómina o comprobantes digitales por concepto de nómina* tienen como objetivo presentar la información del pago de las remuneraciones de cada uno de los servidores públicos de la entidad fiscalizable de que se trate correspondiente a un periodo determinado.

En estas condiciones, resulta claro que la información consistente en los comprobantes fiscales digitales donde consta el sueldo de los servidores públicos titulares de la Dirección Jurídica y de la Dirección Municipal de Gobierno, es generada en ejercicio de las atribuciones del **Sujeto Obligado** de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 4, segundo párrafo y 12, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; consecuentemente debe obrar en sus archivos de conformidad a lo que señala el artículo 19 de la Ley de Transparencia Local que establece que debe presumirse la existencia de la información, si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los Sujetos Obligados.

Además, de que la información requerida es de interés general y de alcance público, puesto que la ciudadanía tiene derecho a saber cuál es el gasto ejercido para el pago de remuneraciones por servicios personales al realizar las funciones públicas; esto es, su acceso permite transparentar la aplicación de los recursos públicos que son otorgados para el cumplimiento de sus funciones, ello conforme a lo dispuesto por los artículos 7 y 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que establece como deber de los Sujetos Obligados el hacer pública toda la información respecto a los montos y nombres de las personas a quienes se entreguen recursos públicos y con ello transparentar la forma, términos, causas y finalidad en la disposición de esos recursos; precepto legal que es del tenor siguiente:

***“Artículo 7. El Estado de México garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad,*** *autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, jurídico colectiva o sindicato* ***que reciba y ejerza recursos públicos*** *o realice actos de autoridad* ***en el ámbito de competencia del Estado de México y sus municipios****.*

*Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder:*

*(…)*

***IV. Los ayuntamientos y las dependencias, organismos, órganos y entidades de la administración municipal;***

*(…)*

***Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.***

*Los servidores públicos deberán transparentar sus acciones así como garantizar y respetar el derecho de acceso a la información pública.”*

Sirve de sustento por analogía, para justificar la publicidad sobre los datos relativos a los montos por concepto de pago de las remuneraciones, los criterios **01/2003** y **02/2003** emitidos por el Comité de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se citan:

***“Criterio 01/2003.***

***INGRESOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONSTITUYEN INFORMACIÓN PÚBLICA AÚN Y CUANDO SU DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR LA VIDA O LA SEGURIDAD DE AQUELLOS.***

*Si bien el artículo 13, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y  Acceso  a la información Pública Gubernamental establece que debe clasificarse como información confidencial la que conste en expedientes administrativos cuya difusión  pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, debe reconocerse que aun y  cuando en ese supuesto podría encuadrar la relativa a las percepciones ordinarias y extraordinaria de los servidores públicos, ello no obsta para reconocer que el legislador estableció en el artículo 7 de ese mismo ordenamiento que la referida información, como una obligación de trasparencia,* ***deben publicarse en medios remotos o locales de comunicación electrónica, lo que se sustenta en el hecho de que el monto de todos los ingresos que recibe un servidor público por desarrollar las labores que les son encomendadas con motivo del desempeño del cargo respecto. Constituyen información pública, en tanto que se trata de erogaciones que realiza un órgano del Estado en base con los recursos que encuentran su origen en mayor medida en las contribuciones aportados por los gobernados****…”*

***“Criterio 02/2003.***

***INGRESOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SON INFORMACIÓN PÚBLICA AÚN Y CUANDO CONSTITUYEN DATOS PERSONALES QUE SE REFIEREN AL PATRIMONIO DE AQUÉLLOS.***

*De la interpretación sistemática de lo previsto en los artículos 3º, fracción II; 7º, 9º y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se advierte que no constituye información confidencial la relativa a los ingresos que reciben los servidores públicos, ya que aun y cuando se trata de datos personales relativos a su patrimonio, para su difusión no se requiere consentimiento de aquellos,* ***lo que deriva del hecho de que en términos de los previsto en el citado ordenamiento deben ponerse a disposición del público a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica, tanto el directorio de servidores públicos como las remuneraciones mensuales por puesto incluso*** *el sistema de compensación…”*

Ahora bien, el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone lo siguiente:

*“Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:*

*…*

*VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;”*

Robustece lo anterior, el artículo 92, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, señala:

*“Artículo 92. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:*

*(…)*

*VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;”*

De esta manera las remuneraciones bruta y neta, o bien sueldos, de los servidores públicos, constituyen una obligación de transparencia común de los sujetos obligados; y en tal virtud procede la entrega de la información peticionada, máxime que los recibos de nómina o comprobantes fiscales digitales por internet, dentro de los elementos que lo integran se encuentra la forma de pago de la remuneración, información que también fue requerida y es de naturaleza pública por corresponder a la forma en que se le paga al trabajador por concepto de remuneración (efectivo, cheque o transferencia).

Para efecto de lo anterior, conviene señalar los requisitos que deben contener las facturas que emitan los entes públicos, entre otros, por concepto de nómina, conforme lo establecido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)[[3]](#footnote-2):

| **•** | Clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida. |
| --- | --- |
| **•** | Régimen Fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR. |
| **•** | Sí se tiene más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan las Facturas. |
| **•** | Contener el número de folio asignado por el SAT y el sello digital del SAT. |
| **•** | Sello digital del contribuyente que lo expide. |
| **•** | Lugar y fecha de expedición. |
| **•** | Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expida. |
| **•** | Nombre denominación o razón social de la persona a favor de quien se expide el comprobante. |
| **•** | Régimen fiscal del receptor de comprobante. |
| **•** | Código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante. |
| **•** | Uso del comprobante. |
| **•** | Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen\*. |
| **•** | Valor unitario consignado en número. |
| **•** | Importe total señalado en número o en letra. |
| **•** | Señalamiento expreso cuando la prestación se pague en una sola exhibición o en parcialidades. |
| **•** | Cuando proceda, se indicará el monto de los impuestos trasladados, desglosados por tasa de impuesto y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos. |
| **•** | **Forma en que se realizó el pago (efectivo, transferencia electrónica de fondos, cheque nominativos o tarjeta de débito, de crédito, de servicio o la denominada monedero electrónico que autorice el Servicio de Administración Tributaria).** |
| **•** | Número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación. |

Conforme lo anterior, el documento que puede dar cuenta del sueldo de los Titulares de la Dirección Jurídica y Dirección Municipal de Gobierno y la forma en que se paga el mismo, de manera enunciativa más no limitativa pueden ser los recibos de nómina en los que incluso puede advertirse la forma de pago de la remuneración.

Por lo que, a efecto de que se tenga por colmado el presente requerimiento, el **Sujeto Obligado** deberá entregar en cumplimiento a la presente resolución, en versión pública, lo siguiente:

* Los recibos de pago de salarios y el documento donde conste la forma de pago de la remuneración, de los Titulares de la Dirección Jurídica y Dirección Municipal de Gobierno de los meses de abril a julio de dos mil veintitrés.

Además, conforme la normatividad que regula al **Sujeto Obligado** se advierte que este cuenta con unidades administrativas que conforme sus atribuciones pueden poseer, generar y/o administrar lo ordenado en la presente resolución; siendo estas la Tesorería Municipal y la Presidencia Municipal.

Para efecto de sustentar lo anterior, resulta conveniente citar el contenido de los artículos 48, fracción VI, 93, 95, fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que a la letra señalan lo siguiente:

***“Ley Orgánica Municipal del Estado de México***

*TITULO III De las Atribuciones de los Miembros del Ayuntamiento, sus Comisiones, Autoridades Auxiliares y Organos de Participación Ciudadana CAPITULO PRIMERO DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES*

***Artículo 48.- La persona titular de la presidencia municipal*** *tiene las siguientes atribuciones:*

*[…]*

***VI. Proponer al ayuntamiento los nombramientos de las personas titulares de la secretaría, tesorería y de las dependencias y*** *organismos auxiliares de la administración pública municipal, observando en todo tiempo que en su integración se respeten los principios de igualdad, equidad y garantizando la paridad de género;*

*[…]”*

*TITULO IV Régimen Administrativo*

*CAPITULO SEGUNDO De la Tesorería Municipal*

*Artículo 93.- La tesorería municipal es el órgano encargado de la recaudación de los ingresos municipales y responsable de realizar las erogaciones que haga el ayuntamiento.*

*Artículo 95.- Son atribuciones del tesorero municipal:*

*(…)*

*IV. Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos, egresos, e inventarios;*

*(…)”*

De lo anterior, se desprende que el Titular de la Presidencia Municipal es el encargado de proponer al Ayuntamiento los nombramientos de las dependencias de la administración pública municipal, por lo que, al ser este el documento donde consta la jornada laboral u horario de trabajo de los servidores públicos de quienes se requiere la información, por ende la **Presidencia Municipal** es una de las áreas competentes para conocer de lo peticionado.

Por su parte, la **Tesorería Municipal** es el órgano encargado de la recaudación de los ingresos municipales y responsable de realizar las erogaciones que haga el ayuntamiento; encargado de llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos, egresos, e inventarios; de ahí que dicha área sea la competente para conocer de los recibos de nómina de los servidores públicos de quienes se requieren los mismos.

Por lo que, en el caso, se debió turnar la solicitud de información a la **Presidencia Municipal** y a la **Tesorería Municipal;** no obstante, de la consulta realizada al expediente electrónico aperturado con motivo del presente medio de impugnación, se advierte que no se turnó a los servidores públicos habilitados competentes; incumpliendo con el requisito de turnar las solicitudes de información a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones.

A mayor abundamiento, conviene precisar el procedimiento que los Sujetos Obligados deben seguir para la atención a las solicitudes de acceso a la información, establecido en los artículos 151, 159, 160, 162, 163, 164, 165 y 166, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual es el siguiente:

* Las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados deben garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona puede ejercer el derecho de acceso a la información; por lo que, son las responsables de hacer las notificaciones correspondientes, además de llevar a cabo de todas las gestiones necesarias para facilitar el acceso de la información;
* Los Sujetos Obligados podrán requerirle a los Solicitantes, que complementen, corrijan o amplíen su solicitud de información, cuando resulten los datos proporcionados insuficientes, incorrectos, incompletos o erróneos; solicitar dicha aclaración, interrumpirá el plazo para dar respuesta y comenzará a computarse el día siguiente al desahogo de esta;
* Las respuestas a los requerimientos informativos deberán notificarse al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder **quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de ésta.** Excepcionalmente, el plazo referido podrá ampliarse por siete días hábiles más, cuando existan razones fundadas y motivadas, a través del Comité de Transparencia;
* **Las Unidades de Transparencia garantizarán que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, funciones y atribuciones, para que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la documentación solicitada, con el fin de que proporcionen las expresiones documentales que se encuentren en sus archivos o que estén constreñidos a elaborar;**
* El acceso se dará en la modalidad de entrega y en su caso, de envío elegido por el solicitante, cuando no pueda entregarse en dicha modalidad, el Sujeto Obligado deberá ofrecer otras; por lo cual, deberá fundamentar y motivar la necesidad de modificar el medio de entrega, y
* Las Unidades de Transparencia, tendrán disponible la información requerida durante un plazo mínimo de sesenta días hábiles, contados a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles; por lo que, una vez transcurrida dicha temporalidad, los Sujetos Obligados darán por concluida la solicitud y procederán de ser el caso, a la destrucción del material.

En el caso se colige que la Unidad de Transparencia no turnó la solicitud de información a las áreas competentes que cuentan con la información de acuerdo con sus facultades, funciones y atribuciones; por lo que, **el procedimiento de búsqueda de la información NO se tuvo por atendido.**

Bajo esas consideraciones, se advierte que los motivos de inconformidad hechos valer por la persona solicitante devienen **parcialmente fundados**, siendo procedente **Modificar** la respuesta del **Sujeto Obligado** y **ordenar** la entrega de la información precisada.

Finalmente, no pasa desapercibido que en el archivo entregado en respuesta, se advierte que se entregaron: Licencia de Construcción de Barda Perimetral, expedida dentro del expediente 019, en fecha 22 de junio del 2023; Licencia de Excavación, expedida dentro del expediente 001, en fecha 05 de julio del 2023; Constancia de Alineamiento, Folio 019, de fecha de 19 de noviembre de 2022; y, Constancia de Numero Oficial de fecha 22 de noviembre de 2022; todas expedidas por el Director de Desarrollo Urbano; en las cuales se dejaron a la vista la clave catastral de un predio; dato que debió clasificarse como información confidencial, no obstante, no se hizo.

Por lo que, al considerarse como una transgresión al derecho de protección de datos personales, resulta procedente dar vista al Titular de la Dirección General de Protección de Datos Personales de este Órgano, con fundamento en el artículo 82, fracción XXVII de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, para que en ejercicio de sus atribuciones contenidas en el numeral 24, fracciones V, XI, XII y XIII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, investigue y sanciones las posibles omisiones en las que el **Sujeto Obligado** pudo haber incurrido por el incumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y, las demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia; en caso de acreditarse las mismas, lo deberá hacer del conocimiento del Órgano de Control Interno del **Sujeto Obligado** para que este determine lo que conforme derecho corresponda, cuyo resultado deberá ser informado a este Instituto.

**Quinto. Versión Pública.** Finalmente, para la entrega de la información que se determina ordenar, el **Sujeto Obligado** deberá realizar un análisis con la finalidad de advertir si los documentos que se ordenan contienen información susceptible de clasificarse en los términos que la Ley en la materia; por lo que, de ser así, el **Sujeto Obligado** tendrá que elaborar la versión pública del documento que vaya entregar para dar cumplimiento a esta resolución a fin de satisfacer el derecho de acceso a la información pública del recurrente sin menoscabar el derecho a la protección de los datos personales de terceros.

Lo anterior, de conformidad a lo que señalan los artículos 3 fracciones IX, XX, XXI y XLV, 91, 132 fracciones II y III, y 143 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establecen:

*“****Artículo 3****. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*[…]*

***IX. Datos personales:*** *La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

***XX. Información clasificada****: Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial;*

***XXI. Información confidencial:*** *Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;*

***XLV. Versión pública:*** *Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.*

*[…]*

***Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.*

***Artículo 132.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I****. Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II****. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o*

***III****. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.*

*[…]*

***Artículo 143****. Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:*

***I.*** *Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;*

***II.*** *Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y*

***III****. La que presenten los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.*

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.*

*No se considerará confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, ni tampoco la que sea considerada por la presente ley como información pública.”*

De los artículos transcritos anteriormente, se observan las excepciones que tiene el derecho de acceso a la información pública, respecto a algunos tipos de información, lo cual restringe su acceso, precisando de manera clara las hipótesis que dan lugar a clasificar la información, la cual puede ser de dos maneras: Reservada o Confidencial.

En otras palabras, la información confidencial será cuando por su naturaleza, contenga datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable, los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a Sujetos Obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos y la que presenten los particulares a los Sujetos Obligados, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

De igual forma, para el caso de la información confidencial se aprecia, que se establece un procedimiento para clasificar la información como confidencial, mediante el cual se fundamentará y motivará la necesidad de clasificar la información, en el que se precisen los motivos que obliguen a la clasificación; lo que se consolida con lo señalado por el artículo 168 de la Ley en la Materia, que señala:

*“****Artículo 168****. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la información deban ser clasificados, se sujetará a lo siguiente:*

***I.*** *El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que* ***funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia****, mismo que deberá resolver para:*

*a****) Confirmar la clasificación;***

*b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.*

***II.*** *El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y*

***III.*** *La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece esta Ley.”*

De los preceptos anteriores se desprende que cuando un documento que vaya a ser entregado vía acceso a la información pública, contenga tanto información de interés público como información que debe ser clasificada, se hará la entrega del mismo, testando las secciones o datos que deban ser clasificados; por ende el **Sujeto Obligado** deberá proceder a testar los datos personales que se encuentren contenidos en los documentos a entregar por parte del **Sujeto Obligado** para satisfacer el derecho de acceso a la información pública de la recurrente, esto es, los datos concernientes a una persona identificada o identificable, o aquellos datos que tengan el carácter de sensibles, es decir los que afectan la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleven un riesgo grave para aquel de acuerdo a lo que señala la fracción XII del artículo 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México.

En el caso específico, es criterio reiterado de este Instituto que además de los datos especificados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se consideran confidenciales y por tanto deben testarse al momento de la elaboración de versiones públicas el **Registro Federal de Contribuyentes** (RFC), la **Clave Única de Registro de Población** (CURP) y la **Clave de cualquier tipo de seguridad social** (ISSEMYM, u otros), así como, los **préstamos o descuentos** que se le hagan a la persona y que no tengan relación con los impuestos o la cuota por seguridad social, así el **número de empleado,** así como de ser el caso, el **folio fiscal**, la **cadena original,** los **códigos bidimensionales o códigos QR,** y cualquier información de carácter fiscal, bajo las siguientes consideraciones.

En cuanto al RFC, este constituye un dato personal, ya que para su obtención es necesario acreditar ante la autoridad fiscal previamente la identidad de la persona, su fecha de nacimiento, entre otros aspectos.

Ahora bien, las personas físicas tramitan su inscripción en el registro con el propósito de realizar —mediante esa clave de identificación— operaciones o actividades de naturaleza fiscal, la cual, les permite hacerse identificables respecto de una situación fiscal determinada.

Lo anterior es compartido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) a través del Criterio 19/17, el cual es del tenor literal siguiente:

***“Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas.*** *El RFC es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.” (Sic)*

Así, el RFC se vincula al nombre de su titular y permite identificar la edad de la persona, su fecha de nacimiento, así como su homoclave, la cual es única e irrepetible y determina la identificación de dicha persona para efectos fiscales, por lo que constituye un dato personal que concierne a una persona física identificada e identificable en términos de los artículos 3, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y 4 fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.

En cuanto al CURP, en virtud de que este se integra por datos personales que únicamente le conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de nacimiento; información que permite distinguirlo del resto de los habitantes, se considera que es de carácter confidencial.

Argumento que es compartido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI)**, conforme al** criterio número 18/17, el cual refiere:

***“Clave Única de Registro de Población (CURP).*** *La Clave Única de Registro de Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como información confidencial.” (Sic)*

Por otra parte y respecto a la clave de seguridad social y en su caso clave o número del servidor público –trabajador-, en virtud de que su divulgación no aporta a la transparencia o a la rendición de cuentas y sí provoca una transgresión a la vida privada e intimidad de la persona, esta información también resulta ser de carácter confidencial; siendo aplicable como orientador el criterio número 15/10 emitido por el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información (INAI, cuyo texto y sentido literal es el siguiente:

***“El número de ficha de identificación única de los trabajadores es información de carácter confidencial.*** *En los casos en que el número de trabajador o ficha de identificación única constituya un elemento por medio del cual los trabajadores puedan acceder a un sistema de datos o información de la dependencia o entidad, para hacer uso de diversos servicios, como la presentación de consultas relacionadas con su situación laboral particular, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de confidencial, en términos de lo establecido en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en virtud de que a través de la misma es posible conocer información personal de su titular.”*

Respecto de los **préstamos o descuentos** **de carácter personal**, éstos no deben tener relación con la prestación del servicio; es decir, son confidenciales los préstamos o descuentos que se le hagan a la persona en los que no se involucren instituciones públicas, en virtud de no favorecer en la transparencia y rendición de cuentas, sino, por el contrario, con ello se violentaría la protección de información confidencial, porque incide en la intimidad de un individuo identificado.

Por cuanto hace a las deducciones, para entender los límites y alcances de esta restricción, es oportuno recurrir al artículo 84 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios:

***“ARTÍCULO 84.*** *Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo de los servidores públicos por concepto de:*

*I. Gravámenes fiscales relacionados con el sueldo;*

***II. Deudas contraídas con las instituciones públicas o dependencias por concepto de anticipos de sueldo, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados;***

*III. Cuotas sindicales;*

*IV. Cuotas de aportación a fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el servidor público hubiese manifestado previamente, de manera expresa, su conformidad;*

*V. Descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con motivo de cuotas y obligaciones contraídas con éste por los servidores públicos;*

*VI. Obligaciones a cargo del servidor público con las que haya consentido, derivadas de la adquisición o del uso de habitaciones consideradas como de interés social;*

*VII. Faltas de puntualidad o de asistencia injustificadas;*

***VIII. Pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial;*** *o*

***IX. Cualquier otro convenido con instituciones de servicios y aceptado por el servidor público.***

*El monto total de las retenciones, descuentos o deducciones no podrá exceder del 30% de la remuneración total, excepto en los casos a que se refieren las fracciones IV, V y VI de este artículo, en que podrán ser de hasta el 50%, salvo en los casos en que se demuestre que el crédito se concedió con base en los ingresos familiares para hacer posible el derecho constitucional a una vivienda digna, o se refieran a lo establecido en la fracción VIII de este artículo, en que se ajustará a lo determinado por la autoridad judicial.” (Sic)*

Como se puede observar, la Ley del Trabajo de mérito establece claramente cuáles son esos descuentos o gravámenes que directamente se relacionan con las obligaciones adquiridas como servidores públicos y aquéllos que únicamente inciden en su vida privada. De este modo, descuentos por pensiones alimenticias o créditos adquiridos con instituciones privadas que no se relacionen con el gasto público, son información que debe clasificarse como confidencial.

En conclusión, los préstamos o descuentos de carácter personal, en virtud de no tener relación con la prestación del servicio y al no involucrar instituciones públicas, se consideran datos confidenciales.

**De la información fiscal**:

La **Cadena Original** es la secuencia de datos formada con la información contenida dentro de los comprobantes fiscales, entre los que podría encontrarse de manera enunciativa, más no limitativa, el RFC del receptor, es decir del servidor público. En dicho supuesto, la cadena original constituiría información que únicamente atañe al contribuyente, siendo tarea del **Sujeto Obligado** analizar dicha circunstancia con la finalidad de proteger, de ser el caso, la información a través de su clasificación por actualizarse el supuesto de confidencialidad.

Los **códigos bidimensionales** o **códigos QR,** al corresponder a barras en dos dimensiones que, al igual que los códigos de barras o códigos unidimensionales, son utilizados para almacenar diversos tipos de datos de manera codificada, los cuales a través de lectores que pueden ser obtenidos por cualquier persona, pueden contener datos personales, no susceptibles de conocimiento público, debiendo el **Sujeto Obligado** analizar dicha circunstancia con la finalidad de determinar si se actualiza algún supuesto de confidencialidad.

En tal sentido, si derivado del análisis efectuado por **Sujeto Obligado** en el presente caso, se desprende que, de la información fiscal contenida en los comprobantes fiscales digitales por internet, tales como cadenas, sellos digitales y/o códigos bidimensionales, se pueden obtener datos personales como el Registro Federal de Contribuyentes, la Clave Única del Registro de Población, entre otros no susceptibles de conocimiento público que, de difundirse, pudieran hacer identificable a una persona, deberá clasificarla como confidencial, de manera fundada y motivada en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Al respecto, se destaca que la versión pública que elabore **el Sujeto Obligado** debe cumplir con las formalidades exigidas en la ley, por lo que para tal efecto emitirá el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, Así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Consejo Nacional de Transparencia, con el cual sustentara la clasificación de datos y con ello la "versión pública" de los documentos materia de las solicitudes.

Efectivamente, cuando se clasifica información como confidencial o reservada es importante someterlo al Comité de Transparencia, quien debe confirmar, modificar o revocar la clasificación.

En ese contexto, la clasificación de la información no opera con la simple supresión de datos que se haga en los documentos de que se trate o con la simple decisión que tome el Servidor Público Habilitado o el Responsable de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, sino que ello deberá realizarse en términos de lo que disponen los artículos 49 fracción VIII, 53, fracción X y 59, fracción V, de la Ley en consulta, cuyo sentido literal es el siguiente:

***“Artículo 49.******Los Comités de Transparencia*** *tendrán las siguientes atribuciones:*

***VIII. Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información****…”*

*“****Artículo 53.*** *Las* ***Unidades de Transparencia*** *tendrán las siguientes* ***funciones****:*

***X. Presentar ante el Comité, el proyecto de clasificación de información****…”*

***“Artículo 59.*** *Los* ***servidores públicos habilitados*** *tendrán las* ***funciones*** *siguientes:*

***V. Integrar y presentar al responsable de la Unidad de Transparencia la propuesta de clasificación de información****, la cual tendrá los fundamentos y argumentos en que se basa dicha propuesta…”(Sic)*

Denotándose de dichos elementos normativos que el determinar la clasificación de la información es un trabajo en conjunto tanto de los Servidores Públicos Habilitados, de las Unidades de Transparencia y del Comité de Transparencia del **Sujeto Obligado**, teniendo el deber los primeros de ellos de presentar ante la Unidad de Transparencia la propuesta de la clasificación de la información, para que luego ésta presente ante al Comité de Transparencia de así resultar procedente el proyecto de clasificación de la información y finalmente sea éste último quien apruebe, modifique o revoque la clasificación de la información solicitada.

Para lo cual, a su vez en el caso de información de carácter confidencial, se debe atender a lo que señala el artículo 149 de la Ley de Transparencia Local vigente, que se lee como sigue:

*“****Artículo 149.*** *El* ***acuerdo que clasifique la información como confidencial*** *deberá contener un razonamiento lógico en el que demuestre que la información se encuentra en alguna o algunas de las hipótesis previstas en la presente Ley.”*

Es decir, el **Sujeto Obligado** a través de su Comité de Transparencia, deberá elaborar acuerdo que contenga un razonamiento lógico con el que se demuestre que la información que se testa de las versiones públicas que se sirva elaborar, encuadra en alguna de las hipótesis que contempla la Ley de la Materia en su artículo 143; ya que de lo contrario, se crearía la incertidumbre jurídica en relación a si lo entregado es formalmente una versión pública, o un documento ilegible, incompleto o tachado; en otras palabras si no se exponen de manera puntual las razones de la versión pública de la documentación entregada se estaría violentando el derecho de acceso a la información de la parte solicitante.

Igualmente, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, tienen por objeto establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas.

Entorno a lo que aquí nos interesa, los Lineamientos Quincuagésimo, Quincuagésimo primero, Quincuagésimo segundo, Quincuagésimo cuarto y Quincuagésimo quinto señalan las formalidades que deberá llevar el acuerdo de clasificación que deberá emitir el **Sujeto Obligado**, siendo estas las siguientes:

*“CAPÍTULO VIII*

*DE LOS ELEMENTOS PARA LA CLASIFICACIÓN*

***Quincuagésimo.*** *Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán establecer sus propios modelos o formatos para la elaboración de versiones públicas de documentos o expedientes, siempre y cuando cumplan lo establecido en los presentes Lineamientos, así como en las correspondientes Leyes Generales.*

***Quincuagésimo primero.*** *Toda acta del Comité de Transparencia deberá contener:*

*I. El número de sesión y fecha;*

*II. El nombre del área que solicitó la clasificación de información;*

*III. La fundamentación legal y motivación correspondiente;*

*IV. La resolución o resoluciones aprobadas; y*

*V. La rúbrica o firma digital de cada integrante del Comité de Transparencia.*

*[…]*

*En los casos de resoluciones del Comité de Transparencia en las que se* ***confirme la clasificación de información confidencial solo se deberán de identificar los tipos de datos protegidos, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo.***

***Quincuagésimo segundo.*** *Para la clasificación y elaboración de versiones públicas de documentos que contengan información clasificada como reservada o* ***confidencial,*** *las áreas de los sujetos obligados deberán tomar las medidas pertinentes tendientes a asegurar que el espacio utilizado para testar la información no podrá ser empleado para la sobreposición de contenido distinto al autorizado por el Comité.*

*En el caso específico de la clasificación y elaboración de versiones públicas de documentos que contengan información confidencial, las áreas de los sujetos obligados deberán:*

***I. Fijar la fecha en que se elaboró la versión pública y la fecha en la cual el Comité de Transparencia confirmó dicha versión;***

***II. Señalar dentro del documento el tipo de información confidencial que fue testada en cada caso específico, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo; y***

***III. Señalar las personas o instancias autorizadas a acceder a la información clasificada.***

*En los documentos de difusión electrónica, señalar en la primera hoja y en el nombre del archivo, que la versión pública corresponde a un documento que contiene* ***información confidencial.***

***[…]***

***Quincuagésimo cuarto.*** *Cuando el Comité de Transparencia confirme la clasificación de documentos reservados y/o* ***confidenciales****, sea total o parcialmente; se deberá anexar al expediente la resolución que determinó la clasificación o, en su defecto, identificar en la carátula del expediente del cual formen parte, la fecha y sesión del Comité de Transparencia en la que se confirmó dicha clasificación.*

***Quincuagésimo quinto.*** *Cada área del sujeto obligado podrá designar formalmente a una o más personas como responsables del testado, que sean encargadas de la adecuada elaboración o supervisión de las versiones públicas de los documentos o expedientes, verificando que cumplan con los requisitos señalados en las Leyes Generales, los presentes Lineamientos y demás normativa aplicable antes de su confirmación por el Comité de Transparencia.” (Énfasis añadido)*

Por lo tanto, la entrega de documentos en su versión pública debe acompañarse necesariamente del Acuerdo del Comité de Transparencia que la sustente el cual debe estar debidamente fundado y motivado, en el que se expongan los fundamentos y razonamientos que llevaron al **Sujeto Obligado** a testar, suprimir o eliminar datos de dicho soporte documental, ya que no hacerlo, se reitera que lo entregado no tendría un sustento jurídico ni resultaría ser una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; ya que el no justificar las causas o motivos por las que no se aprecian determinados datos -ya sea porque se testan o suprimen- deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva.

Así, con fundamento en lo prescrito en los artículos 5 párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185 y 186 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

**III. R E S U E L V E**

**Primero.** Resultanparcialmente fundados los motivos de inconformidad hechos valer por la parte **Recurrente** en el recurso de revisión **06369/INFOEM/IP/RR/2023,** por lo que, en términos del Considerando **Cuarto** de la presente resolución, se **Modifica** la respuestadel **Sujeto Obligado.**

**Segundo.** Se **Ordena** al **Sujeto Obligado**, en términos de los Considerandos **Cuarto y Quinto** de esta resolución, haga entrega vía SAIMEX, previa búsqueda exhaustiva y razonable, en versión pública de ser procedente, los documentos donde conste lo siguiente:

1. De los titulares de laDirección Jurídica y de la Dirección Municipal de Gobierno, en funciones al catorce de agosto de dos mil veintitrés:
2. El horario laboral
3. Los recibos de pago de salarios y el documento donde conste la forma de pago de los meses de abril a julio de dos mil veintitrés.

*Debiendo acompañar con el Acuerdo del Comité de Transparencia de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen de los soportes documentales objeto de las versiones públicas que se formulen y se pongan a disposición de* ***la parte Recurrente,*** *mismo que igualmente hará de su conocimiento.*

1. Acuerdo que emita el Comité de Transparencia mediante el que confirme la declaratoria de incompetencia del **Sujeto Obligado**, respecto de la información consistente en: el o los documentos donde consten los horarios laborales y recibos de nómina de los servidores públicos titulares de la Dirección Jurídica y la Dirección Municipal de Gobierno por su empleo en el Ayuntamiento de Amecameca.

**Tercero. Notifíquese,** vía **SAIMEX**, al Titular de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado,** la presente resolución para que conforme a los artículos 186, último párrafo y 189, párrafo segundo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente, y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**Cuarto.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **Sujeto Obligado** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**Quinto. Notifíquese,** vía **SAIMEX** a la parte **Recurrente** la presente resolución, así como, que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que le causa algún perjuicio podrá impugnarla vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

**Sexto. Gírese** a la **Dirección General de Protección de Datos Personales**, en atención al artículo 82, fracción XXVII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios en términos de lo señalado en el **Considerando Cuarto** de la presente resolución.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.



1. Artículo 92. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: (…) [↑](#footnote-ref-0)
2. “Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: (…) XXII. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados…” [↑](#footnote-ref-1)
3. http://omawww.sat.gob.mx/factura/Paginas/solicita\_requisitos.htm [↑](#footnote-ref-2)